Bogotá D.C., Agosto 02 de 2023.

**Informe de ponencia para segundo debate del proyecto de ley no. 279 de 2022 Cámara *“*Por medio del cual se fortalecen las defensorías de familia y se dictan otras disposiciones*.”***

Honorable Representante

**Oscar Sánchez**

**Presidente**

Comisión Primera Constitucional

Cámara de Representantes

**Asunto:** Informe de ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 279 de 2022 Cámara “por medio del cual se fortalecen las defensorías de familia y se dictan otras disposiciones.”

Estimado señor presidente,

En cumplimiento del encargo hecho por la mesa directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, con fundamento en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 279 de 2022 Cámara “por medio del cual se fortalecen las defensorías de familia y se dictan otras disposiciones.”,conforme la siguiente estructura:

1. Trámite del proyecto
2. Objetivo del proyecto
3. Contenido de la iniciativa
4. Justificación del proyecto
5. Marco legal y constitucional
6. Audiencia Pública
7. Texto aprobado en primer debate en la Comisión Primera Constitucional
8. Consideraciones
9. Pliego de modificaciones
10. Conflicto de intereses
11. Proposición
12. Texto propuesto para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes

En consecuencia, se rinde a continuación el informe de ponencia.

1. **Trámite del proyecto.**

El proyecto de ley se radicó el 09 de noviembre de 2022. Posteriormente, se realizó Audiencia Pública el 27 de abril de 2023.

En cuanto a la discusión del proyecto de ley, el 13 de junio de 2023 se aprobó en primer debate y actualmente se encuentra en trámite en plenaria.

1. **Objetivo del proyecto.**

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto el fortalecimiento institucional de las Defensorías de Familia y mejorar las condiciones laborales de los defensores de familia.

1. **Contenido de la iniciativa.**

Contiene 19 artículos, entre los cuales se regulan varios aspectos. Primero, la obligación de los empleadores públicos y privados de efectuar el descuento por nómina, cuando así lo ordene el defensor de familia, correspondiente al pago de la cuota alimentaria establecida, cuando el deudor haya incumplido, se haya negado al pago de lo adeudado, o existan indicios de la intención de sustraerse del pago.

Segundo, el fortalecimiento de las Defensorías de Familia en cuanto a la disposición de tecnología y peritos para la recaudación de pruebas, en los casos de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Tercero, la definición y naturaleza de las Defensorías de Familia, junto con los profesionales interdisciplinarios que deben laborar en las mismas, y la formación y actualización de conocimientos con la que deben contar.

Cuarto, la priorización de la oralidad y de audiencias virtuales en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos.

Quinto, la asignación salarial para los Defensores de Familia, correspondiente al grado más alto del nivel profesional de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la asignación de la prima contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

Sexto, la creación de la Dirección de Defensorías de Familia y las Unidades de Atención Familiar.

Finalmente, aspectos fundamentales frente a las medidas de restablecimiento de derechos y la declaratoria de vulneración, así como frente al derecho a los alimentos de adultos mayores.

1. **Justificación del proyecto.**

La presente iniciativa legislativa surge de la identificación de una problemática por la que atraviesan las Defensorías de Familia en el país. Actualmente dichas defensorías reciben gran demanda de servicios y su capacidad se ha visto desbordada. Anudado a lo anterior, la carga laboral para los Defensores de Familia y demás funcionarios de las entidades en cuestión es bastante alta.

Es de recordar que el problema anterior ha sido manifestado en varias ocasiones por los funcionarios de las Defensorías de Familia. En el mes de mayo de 2022, los trabajadores del ICBF en Barrancabermeja, cesaron actividades, por alrededor de 3 días, con el fin de manifestar su descontento frente a la carga laboral de las mencionadas instituciones que, según ellos, se produjo por la puesta en marcha de la Ley 2126 de 2021; que le brinda herramientas a las Comisarías de Familia para gestionar su diseño institucional y que termina por agregar labores a la competencia de las Defensorías de Familia.[[1]](#footnote-1)No es la primera vez que sucede este tipo de cese de actividades o paros por parte de los funcionarios del ICBF y por los mismos motivos.[[2]](#footnote-2)

Sumado a lo anterior, la sobrecarga laboral de las Defensorías de Familia fue acreditada en el informe de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de la PGN, llamado “*Vigilancia superior a las defensorías de familia y a la garantía y restablecimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el sistema de protección del Estado*.”

El informe estableció varias consideraciones importantes de resaltar. En primer lugar, el 78% de los Defensores de Familia manifestaron tener una carga laboral alta. El dato se obtuvo mediante una encuesta realizada a 630 Defensores de Familia. En segundo lugar, dentro de los factores por los cuales los despachos de los Defensores de Familia no logran realizar el seguimiento a sus propias medidas para el restablecimiento de derechos, la sobrecarga laboral es el mayor motivo con un 41,8%. A continuación la gráfica presentada por el informe en cuestión.[[3]](#footnote-3)

**

Fuente: *Informe* *Vigilancia superior a las defensorías de familia y a la garantía*

*y restablecimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que*

*se encuentran bajo el sistema de protección del Estado. Octubre de 2020.*

En tercer lugar, de los Servidores Públicos del ICBF con recomendaciones médico-laborales, el 79,31% corresponde a Defensores de Familia.

La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, recomendó realizar un estudio sobre la carga laboral de los Defensores de Familia, con el fin de superar las dificultades observadas. También identificó algunos otros aspectos sobre las Defensorías de Familia que resultan ser problemas internos y que deben abordarse: alto índice de solicitudes de restablecimiento de derechos, alto índice de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos, equipos interdisciplinares incompletos, entre otros.

Finalmente, una de las conclusiones que reporta la institución en su informe es la siguiente: “es necesario evaluar la capacidad de gestión por Defensoría de Familia frente a la demanda real y el tiempo que ingresa diariamente a los centros zonales de todo el país, teniendo en cuenta la densidad demográfica, la cultura y diversidad étnica, los índices de violencia y maltrato contra los NNA, los usos y las costumbres, entre otros factores a determinar, el número de Defensorías de Familia y equipos psicosociales necesarios para dar un atención oportuna en los territorios, o la modificación de la estructura de atención que presenta el Instituto al día de hoy”.[[4]](#footnote-4)

Cabe recordar la importante labor que realizan las Defensorías de Familia en el país. Dichas entidades están encargadas de prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Derechos que, además, prevalecen en el ordenamiento jurídico colombiano. Por tal razón, para garantizar la prestación de calidad de los servicios, es necesario abordar las problemáticas de la entidad y a su vez, aportar a hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de mejores instituciones, procedimientos y funcionarios.

1. **Marco legal y constitucional.**

|  |
| --- |
| **NORMAS CONSTITUCIONALES** |
| Artículo 2 | “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.[[5]](#footnote-5) |
| Artículo 44 | “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”[[6]](#footnote-6) |
| Artículo 93 | “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”[[7]](#footnote-7) |

|  |
| --- |
| **TRATADOS INTERNACIONALES** |
| Convención Americana sobre Derechos Humanos | “Artículo 19. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”[[8]](#footnote-8) |
| Convención sobre los Derechos del Niño | “Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplanlas normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.”[[9]](#footnote-9)“Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.”[[10]](#footnote-10) |

|  |
| --- |
| **LEYES** |
| Ley 1098 de 2016 | “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.”[[11]](#footnote-11) |
| Ley 1878 de 2018 | “Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1908 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones.”[[12]](#footnote-12) |
| Ley 2126 de 2021 | “Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías de Familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones.”En especial el artículo 44: “El Gobierno nacional en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en coordinación con las entidades competentes, en un plazo no mayor a dieciocho (18) meses, a partir de la vigencia de la presente ley, tomará las medidas administrativas y presupuestales necesarias de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para fortalecer la capacidad institucional de las Defensorías de Familia y mejorar las condiciones laborales de los defensores de familia a nivel nacional, con el fin de garantizar el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de sus funciones las cuales están orientadas a prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.[[13]](#footnote-13) |

1. **Audiencia Pública**

El 27 de abril de 2023 se realizó audiencia pública sobre el proyecto de ley con el fin de discutir algunos temas de carácter jurídico, como por ejemplo, posibles temas que entran en pugna con la unidad de materia y cambios en el procedimiento por el cual se fija la cuota alimentaria en el país.

Algunas Intervenciones fueron:

* María Alejandra Vallejos – Coordinadora del grupo técnico encargado de asesorar la construcción de la ponencia del proyecto de ley.

Se plantearon varios interrogantes sobre el proyecto de ley. Primero, se cuestionó si el artículo 2 modifica el procedimiento por el cual se fija cuota alimentaria en el país y si entra en contradicción con lo establecido en los artículos 129 y 130 de la ley 1098 de 2006, así mismo con el artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo y 397 del Código General del Proceso. Segundo, se cuestionó si el proyecto de ley le asigna las mismas facultades de los Jueces de Familia a los Defensores de Familia. Tercero, se cuestionó el alcance del concepto “homologación” contenido en el artículo 13, en ese sentido, se volvió a preguntar si el proyecto de ley modifica el procedimiento por el cual se fija la cuota alimentaria en Colombia y si la homologación de la resolución del Defensor de Familia por parte del juez, quiere decir que este último queda obligado y no puede realizar cambios de considerarlo necesario. Por último, se planteó, sobre el artículo 14, que es innecesario eliminar la obligación, en cabeza de las autoridades administrativas y judiciales, de cumplir con los términos que trae la ley para adelantar sus labores, teniendo en cuenta que con el proyecto de ley se le están dando herramientas a las Defensorías de Familia para mejorar sus condiciones de trabajo.

* Leonel Barreto Alfonso – Fiscal de ACODEFAM

Se puso de presente el origen del proyecto de ley; se manifestó que el artículo 44 de la ley 2126 de 2021 obliga al Gobierno Nacional a potenciar las Defensorías de Familia y fortalecer y mejorar las condiciones económicas de los Defensores de Familia. El citado artículo estipuló un término de 18 meses para que el Gobierno Nacional cumpliera con lo anterior, sin embargo, la norma se viene incumpliendo desde hace 3 meses. También se resaltó las condiciones en las que actualmente laboran los Defensores de Familia y se señaló que los mismos se encuentran desbordados en la carga laboral que reciben. Lo anterior tiene repercusión en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

* Yael Andrea Diaz – Vicepresidente de ACODEFAM

Se recordó la importancia de la labor que realizan las Defensorías de Familia en garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia colombiana y la importancia de fortalecer sus capacidades para prestar un servicio de calidad. Se señalaron también las precariedades que actualmente tienen las Defensorías de Familia, la más importante es la falta del recurso humano y materiales. Otras precariedades son: la falta de herramientas tecnológicas adecuadas y grupos psicosociales fuertes y completos.

* Defensores de Familia en general

Se recalcó la carga laboral que manejan los Defensores de Familia y las enfermedades de salud mental que los aquejan derivadas de la misma; la necesidad del fortalecimiento de las capacidades de las Defensorías de Familia para garantizar a plenitud los derechos de los niños, niñas y adolescentes; la importancia de la aprobación del proyecto de ley para poder prestar un mejor servicio y para mejorar los salarios de los Defensores de Familia.

* Martha Tobar – Directora de la Dirección de Protección del ICBF

El ICBF recibe con beneplácito el proyecto de ley y manifestó que no hay discusión frente a la importancia de los Defensores de Familia y de mejorar sus condiciones laborales. Se hizo énfasis en la necesidad de una asignación presupuestal mayor para poder materializar las estrategias que tiene la institución para poder fortalecer las Defensorías de Familia. También en la necesidad de un aumento del personal de planta, un aumento de los salarios, y la mejora en la infraestructura disponible para adelantar la labor de las Defensorías de Familia.

* Natalia Martínez Pardo – Delegada de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá.

La Secretaría de Integración Social de la Alcaldía Mayor de Bogotá presentó varios puntos a tener en cuenta sobre el proyecto de ley. Primero, celebró la inclusión del artículo 2 y 3 del proyecto de ley. Segundo, pidió definir la competencia, en tanto que el proyecto de ley menciona indistintamente a las Comisarías de Familia y a las Defensorías de Familia, pero su objeto y título se refieren únicamente a estas segundas. Tercero, solicitó revisar el artículo tres en cuanto a las competencias de las Comisarías de Familia, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 2126 de 2021. Cuarto, manifestó que deben revisarse las Unidades de Atención Familiar, de nuevo, en el marco de la ley 2126 de 2021, en lo que respecta a las Comisarías de Familia. Quinto, enunció la importancia de aumentar el talento humano de las Defensorías de Familia para solucionar el problema de la carga laboral. Sexto, insistió en la revisión del artículo 8 teniendo en cuenta el principio de unidad de materia. Séptimo, frente al artículo 9, solicitó revisar el mismo para no generar reprocesos en las Comisarías de Familia.

* Yadira Alarcón - Directora de Derecho de Familia de la Pontificia Universidad Javeriana.

La Pontificia Universidad Javeriana precisó algunos elementos de carácter técnico para corregirle al proyecto de ley. Primero, corregir que la ley 1878 es del 2018 y no del 2006. Segundo, corregir el artículo primero que agrega unos parágrafos con un numeral incorrecto, ya que realmente serían los parágrafos 4 y 5 de la ley. Tercero, solicitó revisar las funciones del artículo 4 en cabeza de las Defensorías de familia.

1. **Texto aprobado en primer debate en la Comisión Primera Constitucional**

**TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE EN LA COMISION PRIMERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES**

**AL PROYECTO DE LEY No. 279 DE 2022 CÁMARA**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE FORTALECEN LAS DEFENSORÍAS DE FAMILIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

**EL CONGRESO DE COLOMBIA**

**DECRETA:**

**Artículo 1. Objeto**. La presente ley tiene por objeto el fortalecimiento institucional de las defensorías de familia y mejorar las condiciones laborales de las y los defensores de familia.

**Artículo 2.** Modifíquese el artículo 53 de la ley 1098 de 2006, agregando un parágrafo 4, del siguiente tenor:

**PARÁGRAFO 4.** Ordenar a los empleadores públicos o privados, efectuar el descuento por nómina, para el pago de la cuota alimentaria establecida legalmente, cuando ésta haya quedado en firme, y ejecutoriada en favor del niños, niñas y adolescentes, y el deudor haya incumplido con la obligación o se haya negado al pago de lo adeudado, o existan indicios de la intención de sustraerse del pago, de acuerdo con los artículos 111 y 129 de la Ley 1098 de 2006.

**Artículo 3.** Incorpórese un parágrafo 5 al artículo 53 de la ley 1098 de 2006, así:

**PARÁGRAFO 5**. Para evitar la revictimización, o el retracto por parte de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación, dispondrán de lo pertinente para garantizar que en cada Centro Zonal donde existan Defensorías de Familia y se verifiquen derechos y se adopten medidas en favor de niños niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual, se disponga de peritos e investigadores adscritos a la Fiscalía General de la Nación para que recuden las pruebas y realicen las entrevistas, de forma paralela a la definición de las medidas de restablecimiento de sus Derechos.

**Artículo 4.** Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación, de forma coordinada, dispondrán del personal y la tecnología necesaria para el cumplimiento del artículo anterior.

**Artículo 5.** El artículo 79 de la Ley 1098 de 2006 quedará así:

**ARTÍCULO 79. DEFENSORÍAS DE FAMILIA**. Son dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de carácter multidisciplinario yadministrativo encargadas de prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes según lo establecido en la ley.

Cada defensoría de familia deberá contar con un defensor o defensora de familia que será el responsable de cumplir con las funciones del artículo 82 de la presente ley y de coordinar las actuaciones del equipo multidisciplinario, el equipo de apoyo y los demás integrantes para garantizar una atención integral y especializada a las personas usuarias de los servicios.

A los defensores de familia no se les podrán asignar funciones o responsabilidades que no estén previstas en la presente ley.

El defensor de familia será el director del proceso administrativo de restablecimiento de derechos y tendrá a su cargo el personal asignado a la defensoría de familia, la cual estará conformada por eldefensor de familia y, por lo menos, por un abogado que asumirá la función de secretario de la defensoría, un auxiliar administrativo y un equipo multidisciplinario integrado, por lo menos, por unpsicólogo, un trabajador social y un nutricionista, quienes deberán ser especializados en temas que guarden relación directa con las funciones de las defensorías de familia.

El ICBF dispondrá de equipos de apoyo con profesionales en las diferentes áreas del conocimiento como antropólogos y traductores, entre otras disciplinas, adicionales para cada defensoría de familia, de acuerdo con la demanda y las necesidades del servicio, para garantizar el cabal cumplimiento y la realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Los conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes del equipo multidisciplinario y del equipo de apoyo tendrán el carácter de dictamen pericial.

Cada defensoría de familia contará con el apoyo de un auxiliar jurídico ad-honorem. La defensoría de familia podrá solicitar un judicante adicional siempre que las necesidades del servicio así lo requieran, para lo cual deberá mediar autorización de la coordinación regional zonal respectiva. Los auxiliares jurídicos ad-honorem solo se podrán desempeñar en las áreas de intervención judicial, actuaciones administrativas y las demás de carácter jurídico acordes que sean requeridas en la respectiva defensoría de familia.

**Artículo 6.** Adiciónese el artículo 79 A la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

**Artículo 79 A. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN**. Todo el personal que haga parte de las defensorías de familia deberá contar con una formación y actualización periódica sobre Infancia y Adolescencia, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Convencional, Derecho Penal y Administrativo, atención con enfoque diferencial de género, prevención de la violencia institucional, Derecho Constitucional, métodos alternativos de solución de conflictos y los demás asuntos que estén relacionados con su objetivo misional. Lo anterior estará a cargo del ICBF y para ello podrá suscribir convenios interinstitucionales.

**Artículo 7**. Inclúyase el siguiente parágrafo al artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

**PARÁGRAFO 4.** El proceso administrativo de restablecimiento de derechos se desarrollará el marco de un procedimiento oral y por audiencias, salvo aquellas actuaciones que se autoricen para que sean realizadas por escrito o, que, en virtud del interés superior de los menores de edad, requieran ser llevadas por escrito. Se preferirá la virtualidad, salvo los casos en que la Autoridad Administrativa o judicial considere necesaria la presencialidad, por el interés superior del niño, niña o adolescente.

**Artículo 8.** El defensor de familia tendrá una asignación salarial correspondiente al grado más alto del nivel profesional de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

**Artículo 9.** Modifíquese el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el cual quedará así:

El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil y los Defensores de Familia de los municipios de Quinta y Sexta categoría**.**

**PARÁGRAFO**. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.

**Artículo 10.** La prestación de la que trata el artículo anterior, en lo que respecta a las y los defensores de familia, deberá crearse y hacerse efectiva a partir de la vigencia fiscal siguiente a la promulgación de la presente ley.

**Artículo 11. Dirección de Defensorías de Familia:** Créese la Dirección de Defensorías de Familia dentro de la estructura general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para tal efecto el Instituto, en un plazo no mayor a doce (12) meses, a partir de la vigencia de la presente ley, tomará las medidas administrativas y presupuestales necesarias para este fin.

**Artículo 12.** **Funciones de la Dirección de Defensorías de Familia.** La Dirección de Defensorías de Familia del ICBF tendrá las siguientes funciones:

1. Diseñar el modelo de atención de las defensorías de familia.
2. Crear la Escuela de Formación de Defensorías de Familia.
3. Brindar asistencia técnica a las defensorías de familia cuando estas últimas lo soliciten en los asuntos de su competencia.
4. Definir estrategias de contingencia ante las diferentes situaciones administrativas que se presenten con el personal asignado a las defensorías de familia.
5. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de su objetivo misional.
6. Atender los requerimientos efectuados por parte de las entidades territoriales en el cumplimiento de la labor efectuada por los defensores y que se garantice la cobertura en los territorios.
7. Ser enlace entre los defensores y los departamentos para concertar los planes, programas y proyectos que fortalezcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

**Artículo 13.** Autorícese al gobierno nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, para efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento de lo estipulado en la presente ley.

**Artículo 14.** El artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, quedará así:

**Artículo 103. CARÁCTER TRANSITORIO DE LAS MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y DE LA DECLARATORIA DE VULNERACIÓN.** La autoridad administrativa que tenga la competencia del proceso podrá modificar las medidas de restablecimiento de derechos previstas en este Código cuando esté demostrada la alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución que así lo disponga se proferirá en audiencia y estará sometida a los mecanismos de oposición establecidos para el fallo en el artículo 100 del presente Código, cuando la modificación se genere con posterioridad a dicha actuación.

El auto que fije fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no tendrá recursos.

Cuando el cambio de medida se produzca antes de la audiencia de pruebas y fallo, deberá realizarse mediante auto motivado, notificado por estado, y no es susceptible de recurso alguno.

En los procesos donde se declare en situación de vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes, la autoridad administrativa deberá hacer seguimiento por un término que no exceda seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, término en el cual determinará si procede el cierre del proceso cuando el niño, niña o adolescente esté ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneración de derechos; el reintegro al medio familiar cuando el niño se hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones para garantizar sus derechos; o la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos.

En los casos excepcionales que la autoridad administrativa considere que debe superarse el término de seguimiento, deberá prorrogarlo mediante resolución motivada por un término que no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del término de seguimiento inicial. La prórroga deberá notificarse por Estado.

El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos con el seguimiento tendrá una duración de dieciocho (18) meses, contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de adoptabilidad o el cierre del proceso por haberse evidenciado con los seguimientos, que la ubicación en medio familiar fue la medida idónea.

Cuando la autoridad administrativa supere los términos establecidos en este artículo sin resolver de fondo la situación jurídica o cuando excedió el término inicial de seguimiento sin emitir la prórroga, perderá competencia de manera inmediata y deberá remitir el expediente al Juez de Familia para que este decida de fondo la situación jurídica en un término no superior a dos (2) meses. Si la autoridad administrativa no remite el expediente, el Director Regional hará la remisión al Juez de Familia.

Con el fin de garantizar una atención con enfoque diferencial, en los casos en que se advierta que un proceso no puede ser definido de fondo en el término máximo establecido, por las situaciones fácticas y probatorias que reposan en el expediente, y que la imposibilidad no es por ausencia de acciones de la autoridad, el ICBF reglamentará un mecanismo para que la autoridad administrativa haga la ampliación del término, de forma extraordinaria,mediante resolución motivada, que será objeto de recurso de reposición, y de la homologación ante oposición o solicitud por parte del Ministerio Público.

Cuando se trata de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad en los no cuales se hubiere superado la vulneración de derechos, por su condición, de niños extranjeros no susceptibles de declarar en adoptabilidad o de aquellos casos en los que por razones probadas se debe mantener el proceso, transitoriamente se continuará con la prestación del servicio de la modalidad de protección cuando se requiera, hasta tanto la entidad correspondiente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice la prestación del servicio de acuerdo con sus competencias legales. En éstos casos el proceso se mantendrá abierto mientras se supere la situación que motiva la discapacidad, amenaza o vulneración.

**Artículo 15.** Conforme a lo establecido en el Decreto 936 de 2013, artículos 3 y 4, el ICBF~~,~~ implementará el desarrollo y contenido de la presente Ley en las instancias de desarrollo técnico del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y en las instancias de participación las cuales serán garantes de la sociabilización de la presente Ley por medio de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes correspondiente, con el liderazgo de la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia o quien haga sus veces, de cada municipio.

**Artículo 16.** Créense las Unidades de Atención Familiar (U.A.F) para el acompañamiento de la labor que realizan las Defensorías de Familia,en lo establecido en el Artículo 52 de la Ley 1098 de 2006.

**Artículo 17. Unidades de Atención Familiar (U.A.F).** Son organizaciones de la sociedad civil que cuentan, como mínimo, con los profesionales del equipo multidisciplinario que integran a las Defensorías de Familia.

El Gobierno Nacional a través de la entidad competente reglamentará en un plazo de 6 meses a partir de la promulgación de la presente ley el funcionamiento de las U.A.F considerando como mínimo:

1. Requisitos habilitantes de la organización y proceso de verificación.

2. Mecanismo para el acceso a las U.A.F. por parte de la población.

3. Mecanismos de seguimiento y permanencia como organización habilitada.

4. Definición de los esquemas de apoyo y articulación con las Defensorías de Familia.

Parágrafo 1. De acuerdo con su disponibilidad presupuestal el ICBF podrá contratar los servicios de las U.A.F., con el fin de aliviar la congestión de las Defensorías de Familia, previa solicitud del defensor.

Parágrafo 2. Las organizaciones habilitadas para conformar U.A.F. podrán prestar sus servicios de manera gratuita en los términos definidos por la autoridad competente y tendrán prelación aquellas registradas ante el Sistema Nacional de Voluntariado.

Parágrafo 3. Podrán postularse para conformar U.A.F. Instituciones de Educación Superior, Entidades Sin Ánimo de Lucro y aquellas con Personerías Jurídicas Especiales reconocidas por el Ministerio del Interior.

**Artículo 18**. Para el desarrollo del artículo anterior, añádase un Parágrafo 4 al artículo 52 de la ley 1098, el cual quedará así**:**

**PARÁGRAFO 4**. Los equipos multidisciplinares de las Unidades de Atención Familiar (U.A.F) podrán apoyar la labor de las Defensorías de Familia en la valoración y verificación de Derechos, previa orden de la Autoridad Administrativa, para lo cual deberán cumplir con los requisitos de los equipos multidisciplinarios que integran a las Defensorías de Familia.

**Artículo 19. Vigencia y derogatoria.** La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

*En los anteriores términos fue aprobado con modificaciones el presente Proyecto de Ley según consta en Acta No. 60 de Sesión de Junio 13 de 2023. Anunciado entre otras fechas, el 07 de Junio de 2023 según consta en Acta No. 59.*

1. **Consideraciones**

- Modificaciones realizadas al articulado inicial del proyecto de ley

En el análisis del articulado inicial del Proyecto de Ley se encontró: (i) algunos errores referentes a las normas que se quieren modificar, como por ejemplo, el hecho de añadir un parágrafo cuarto a una norma que ya tiene un parágrafo con ese numeral, (ii) algunos errores de redacción, (iii) algunos vacíos importantes de suplir, como la falta de definición de las Unidades de Atención Familiar y sus funciones respectivas, (iv) algunos errores que se deben corregir conforme a la técnica legislativa, (v) normas que se contradicen con otras normas del ordenamiento jurídico colombiano y que, además, se salen de la unidad de materia del proyecto de ley; sobre todo aquellas que cambian el procedimiento frente a la fijación de cuotas alimentarias y (vi) la confusión de Defensorías de Familia con Comisarías de Familia en algunos artículos. Conforme a lo anterior, se realizaron las respectivas modificaciones al articulado y el mismo fue aprobado en su integridad en primer debate.

- Modificaciones realizadas al articulado en la presente ponencia para segundo debate

El articulado para segundo debate cambio únicamente en dos aspectos. En primer lugar, se avaló la proposición del Honorable Representante Álvaro Rueda, que modifica el artículo 6 del proyecto de ley y que simplemente hace que a la formación de los Defensores de Familia se le agregue conocimientos en Derecho Constitucional y métodos alternativos de solución de conflictos. En segundo lugar, debido a la observación presentada por varios Defensores de Familia, se dejó la prima de la que trata el artículo 9 del proyecto de ley para todos los Defensores de Familia del país y no únicamente para los defensores de los municipios de quinta y sexta categoría, tal como era el objetivo inicial del proyecto de ley.

1. **Pliego de modificaciones.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE** | **TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE** | **OBSERVACIONES** |
| **“POR MEDIO DEL CUAL SE FORTALECEN LAS DEFENSORÍAS DE FAMILIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”** | **“POR MEDIO DEL CUAL SE FORTALECEN LAS DEFENSORÍAS DE FAMILIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”** | Sin modificaciones |
| **Artículo 1. Objeto**. La presente ley tiene por objeto el fortalecimiento institucional de las defensorías de familia y mejorar las condiciones laborales de las y los defensores de familia. | **Artículo 1. Objeto**. La presente ley tiene por objeto el fortalecimiento institucional de las defensorías de familia y mejorar las condiciones laborales de las y los defensores de familia. | Sin modificaciones |
| **Artículo 2.** Modifíquese el artículo 53 de la ley 1098 de 2006, agregando un parágrafo 4, del siguiente tenor:**PARÁGRAFO 4.** Ordenar a los empleadores públicos o privados, efectuar el descuento por nómina, para el pago de la cuota alimentaria establecida legalmente, cuando ésta haya quedado en firme, y ejecutoriada en favor del niños, niñas y adolescentes, y el deudor haya incumplido con la obligación o se haya negado al pago de lo adeudado, o existan indicios de la intención de sustraerse del pago, de acuerdo con los artículos 111 y 129 de la Ley 1098 de 2006. | **Artículo 2.** Modifíquese el artículo 53 de la ley 1098 de 2006, agregando un parágrafo 4, del siguiente tenor:**PARÁGRAFO 4.** Ordenar a los empleadores públicos o privados, efectuar el descuento por nómina, para el pago de la cuota alimentaria establecida legalmente, cuando ésta haya quedado en firme, y ejecutoriada en favor del niños, niñas y adolescentes, y el deudor haya incumplido con la obligación o se haya negado al pago de lo adeudado, o existan indicios de la intención de sustraerse del pago, de acuerdo con los artículos 111 y 129 de la Ley 1098 de 2006. | Sin modificaciones |
| **Artículo 3.** Incorpórese un parágrafo 5 al artículo 53 de la ley 1098 de 2006, así:**PARÁGRAFO 5**. Para evitar la revictimización, o el retracto por parte de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación, dispondrán de lo pertinente para garantizar que en cada Centro Zonal donde existan Defensorías de Familia y se verifiquen derechos y se adopten medidas en favor de niños niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual, se disponga de peritos e investigadores adscritos a la Fiscalía General de la Nación para que recuden las pruebas y realicen las entrevistas, de forma paralela a la definición de las medidas de restablecimiento de sus Derechos. | **Artículo 3.** Incorpórese un parágrafo 5 al artículo 53 de la ley 1098 de 2006, así:**PARÁGRAFO 5**. Para evitar la revictimización, o el retracto por parte de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación, dispondrán de lo pertinente para garantizar que en cada Centro Zonal donde existan Defensorías de Familia y se verifiquen derechos y se adopten medidas en favor de niños niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual, se disponga de peritos e investigadores adscritos a la Fiscalía General de la Nación para que recuden las pruebas y realicen las entrevistas, de forma paralela a la definición de las medidas de restablecimiento de sus Derechos. | Sin modificaciones |
| **Artículo 4.** Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación, de forma coordinada, dispondrán del personal y la tecnología necesaria para el cumplimiento del artículo anterior. | **Artículo 4.** Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación, de forma coordinada, dispondrán del personal y la tecnología necesaria para el cumplimiento del artículo anterior. | Sin modificaciones |
| **Artículo 5.** El artículo 79 de la Ley 1098 de 2006 quedará así:**ARTÍCULO 79. DEFENSORÍAS DE FAMILIA**. Son dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de carácter multidisciplinario yadministrativo encargadas de prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes según lo establecido en la ley.Cada defensoría de familia deberá contar con un defensor o defensora de familia que será el responsable de cumplir con las funciones del artículo 82 de la presente ley y de coordinar las actuaciones del equipo multidisciplinario, el equipo de apoyo y los demás integrantes para garantizar una atención integral y especializada a las personas usuarias de los servicios. A los defensores de familia no se les podrán asignar funciones o responsabilidades que no estén previstas en la presente ley.El defensor de familia será el director del proceso administrativo de restablecimiento de derechos y tendrá a su cargo el personal asignado a la defensoría de familia, la cual estará conformada por el defensor de familia y, por lo menos, por un abogado que asumirá la función de secretario de la defensoría, un auxiliar administrativo y un equipo multidisciplinario integrado, por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista, quienes deberán ser especializados en temas que guarden relación directa con las funciones de las defensorías de familia.El ICBF dispondrá de equipos de apoyo con profesionales en las diferentes áreas del conocimiento como antropólogos y traductores, entre otras disciplinas, adicionales para cada defensoría de familia, de acuerdo con la demanda y las necesidades del servicio, para garantizar el cabal cumplimiento y la realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Los conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes del equipo multidisciplinario y del equipo de apoyo tendrán el carácter de dictamen pericial.Cada defensoría de familia contará con el apoyo de un auxiliar jurídico ad-honorem. La defensoría de familia podrá solicitar un judicante adicional siempre que las necesidades del servicio así lo requieran, para lo cual deberá mediar autorización de la coordinación regional zonal respectiva. Los auxiliares jurídicos ad-honorem solo se podrán desempeñar en las áreas de intervención judicial, actuaciones administrativas y las demás de carácter jurídico acordes que sean requeridas en la respectiva defensoría de familia.  | **Artículo 5.** El artículo 79 de la Ley 1098 de 2006 quedará así:**ARTÍCULO 79. DEFENSORÍAS DE FAMILIA**. Son dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de carácter multidisciplinario y administrativo encargadas de prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes según lo establecido en la ley.Cada defensoría de familia deberá contar con un defensor o defensora de familia que será el responsable de cumplir con las funciones del artículo 82 de la presente ley y de coordinar las actuaciones del equipo multidisciplinario, el equipo de apoyo y los demás integrantes para garantizar una atención integral y especializada a las personas usuarias de los servicios. A los defensores de familia no se les podrán asignar funciones o responsabilidades que no estén previstas en la presente ley.El defensor de familia será el director del proceso administrativo de restablecimiento de derechos y tendrá a su cargo el personal asignado a la defensoría de familia, la cual estará conformada por el defensor de familia y, por lo menos, por un abogado que asumirá la función de secretario de la defensoría, un auxiliar administrativo y un equipo multidisciplinario integrado, por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista, quienes deberán ser especializados en temas que guarden relación directa con las funciones de las defensorías de familia.El ICBF dispondrá de equipos de apoyo con profesionales en las diferentes áreas del conocimiento como antropólogos y traductores, entre otras disciplinas, adicionales para cada defensoría de familia, de acuerdo con la demanda y las necesidades del servicio, para garantizar el cabal cumplimiento y la realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Los conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes del equipo multidisciplinario y del equipo de apoyo tendrán el carácter de dictamen pericial.Cada defensoría de familia contará con el apoyo de un auxiliar jurídico ad-honorem. La defensoría de familia podrá solicitar unjudicante adicional siempre que las necesidades del servicio así lo requieran, para lo cual deberá mediar autorización de la coordinación regional zonal respectiva. Los auxiliares jurídicos ad-honorem solo se podrán desempeñar en las áreas de intervención judicial, actuaciones administrativas y las demás de carácter jurídico acordes que sean requeridas en la respectiva defensoría de familia.  | Sin modificaciones  |
| **Artículo 6.** Adiciónese el artículo 79A a la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:**Artículo 79A. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN**. Todo el personal que haga parte de las defensorías de familia deberá contar con una formación y actualización periódica sobre Infancia y Adolescencia, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Convencional, Derecho Penal y Administrativo, atención con enfoque diferencial de género, prevención de la violencia institucional, Derecho Constitucional, métodos alternativos de solución de conflictos y los demás asuntos que estén relacionados con su objetivo misional. Lo anterior estará a cargo del ICBF y para ello podrá suscribir convenios interinstitucionales. | **Artículo 6.** Adiciónese el artículo 79A a la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:**Artículo 79A. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN**. Todo el personal que haga parte de las defensorías de familia deberá contar con una formación y actualización periódica sobre Infancia y Adolescencia, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Convencional, Derecho Penal y Administrativo, atención con enfoque diferencial de género, prevención de la violencia institucional, Derecho Constitucional, métodos alternativos de solución de conflictos y los demás asuntos que estén relacionados con su objetivo misional. Lo anterior estará a cargo del ICBF y para ello podrá suscribir convenios interinstitucionales. | Sin modificaciones. Es importante tener en cuenta que la proposición avalada del Representante Álvaro Rueda agregó: “Derecho Constitucional, métodos alternativos de solución de conflictos” en comparación a la redacción del articulado para primer debate. |
| **Artículo 7**. Inclúyase el siguiente parágrafo al artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:**PARÁGRAFO 4.** El proceso administrativo de restablecimiento de derechos se desarrollará el marco de un procedimiento oral y por audiencias, salvo aquellas actuaciones que se autoricen para que sean realizadas por escrito o, que, en virtud del interés superior de los menores de edad, requieran ser llevadas por escrito. Se preferirá la virtualidad, salvo los casos en que la Autoridad Administrativa o judicial considere necesaria la presencialidad, por el interés superior del niño, niña o adolescente. | **Artículo 7**. Inclúyase el siguiente parágrafo alartículo 99 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:**PARÁGRAFO 4.** El proceso administrativo de restablecimiento de derechos se desarrollará el marco de un procedimiento oral y por audiencias, salvo aquellas actuaciones que se autoricen para que sean realizadas por escrito o, que, en virtud del interés superior de los menores de edad, requieran ser llevadas por escrito. Se preferirá la virtualidad, salvo los casos en que la Autoridad Administrativa o judicial considere necesaria la presencialidad, por el interés superior del niño, niña o adolescente.  | Sin modificaciones |
| **Artículo 8.** El defensor de familia tendrá una asignación salarial correspondiente al grado más alto del nivel profesional de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. | **Artículo 8.** El defensor de familia tendrá una asignación salarial correspondiente al grado más alto del nivel profesional de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. | Sin modificaciones |
| **Artículo 9.** Modifíquese el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el cual quedará así:El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil y los Defensores de Familia de los municipios de Quinta y Sexta categoría**.** **PARÁGRAFO**. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad. | **Artículo 9.** Modifíquese el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el cual quedará así:El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil y los Defensores de Familia ~~de los municipios de Quinta y Sexta categoría~~. **PARÁGRAFO**. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad. | Se elimina la frase “~~de los municipios de Quinta y Sexta categoría~~” de manera que la prima referida en el artículo sea reconocida a todos los Defensores de Familia del país, tal como era la intención del proyecto de ley inicial.  |
| **Artículo 10.** La prestación de la que trata el artículo anterior, en lo que respecta a las y los defensores de familia, deberá crearse y hacerse efectiva a partir de la vigencia fiscal siguiente a la promulgación de la presente ley. | **Artículo 10.** La prestación de la que trata el artículo anterior, en lo que respecta a las y los defensores de familia, deberá crearse y hacerse efectiva a partir de la vigencia fiscal siguiente a la promulgación de la presente ley. | Sin modificaciones |
| **Artículo 11. Dirección de Defensorías de Familia:** Créese la Dirección de Defensorías de Familia dentro de la estructura general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para tal efecto el Instituto, en un plazo no mayor a doce (12) meses, a partir de la vigencia de la presente ley, tomará las medidas administrativas y presupuestales necesarias para este fin. | **Artículo 11. Dirección de Defensorías de Familia:** Créese la Dirección de Defensorías de Familia dentro de la estructura general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para tal efecto el Instituto, en un plazo no mayor a doce (12) meses, a partir de la vigencia de la presente ley, tomará las medidas administrativas y presupuestales necesarias para este fin. | Sin modificaciones |
| **Artículo 12.** **Funciones de la Dirección de Defensorías de Familia.** La Dirección de Defensorías de Familia del ICBF tendrá las siguientes funciones:1. Diseñar el modelo de atención de las defensorías de familia.2. Crear la Escuela de Formación de Defensorías de Familia.3. Brindar asistencia técnica a las defensorías de familia cuando estas últimas lo soliciten en los asuntos de su competencia.4. Definir estrategias de contingencia ante las diferentes situaciones administrativas que se presenten con el personal asignado a las defensorías de familia. 5. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de su objetivo misional.6. Atender los requerimientos efectuados por parte de las entidades territoriales en el cumplimiento de la labor efectuada por los defensores y que se garantice la cobertura en los territorios.7. Ser enlace entre los defensores y los departamentos para concertar los planes, programas y proyectos que fortalezcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. | **Artículo 12.** **Funciones de la Dirección de Defensorías de Familia.** La Dirección de Defensorías de Familia del ICBF tendrá las siguientes funciones: 1. Diseñar el modelo de atención de las defensorías de familia.
2. Crear la Escuela de Formación de Defensorías de Familia.
3. Brindar asistencia técnica a las defensorías de familia cuando estas últimas lo soliciten en los asuntos de su competencia.
4. Definir estrategias de contingencia ante las diferentes situaciones administrativas que se presenten con el personal asignado~~s~~ a las defensorías de familia.
5. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de su objetivo misional.
6. Atender los requerimientos efectuados por parte de las entidades territoriales en el cumplimiento de la labor efectuada por los defensores y que se garantice la cobertura en los territorios.
7. Ser enlace entre los defensores y los departamentos para concertar los planes, programas y proyectos que fortalezcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
 | Sin modificaciones |
| **Artículo 13.** Autorícese al gobierno nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, para efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento de lo estipulado en la presente ley. | **Artículo 13.** Autorícese al gobierno nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, para efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento de lo estipulado en la presente ley. | Sin modificaciones |
| **Artículo 14.** El artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, quedará así:**Artículo 103. CARÁCTER TRANSITORIO DE LAS MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y DE LA DECLARATORIA DE VULNERACIÓN.** La autoridad administrativa que tenga la competencia del proceso podrá modificar las medidas de restablecimiento de derechos previstas en este Código cuando esté demostrada la alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución que así lo disponga se proferirá en audiencia y estará sometida a los mecanismos de oposición establecidos para el fallo en el artículo 100 del presente Código, cuando la modificación se genere con posterioridad a dicha actuación.El auto que fije fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no tendrá recursos.Cuando el cambio de medida se produzca antes de la audiencia de pruebas y fallo, deberá realizarse mediante auto motivado, notificado por estado, y no es susceptible de recurso alguno.En los procesos donde se declare en situación de vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes, la autoridad administrativa deberá hacer seguimiento por un término que no exceda seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, término en el cual determinará si procede el cierre del proceso cuando el niño, niña o adolescente esté ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneración de derechos; el reintegro al medio familiar cuando el niño se hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones para garantizar sus derechos; o la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos.En los casos excepcionales que la autoridad administrativa considere que debe superarse el término de seguimiento, deberá prorrogarlo mediante resolución motivada por un término que no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del término de seguimiento inicial. La prórroga deberá notificarse por Estado.El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos con el seguimiento tendrá una duración de dieciocho (18) meses, contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de adoptabilidad o el cierre del proceso por haberse evidenciado con los seguimientos, que la ubicación en medio familiar fue la medida idónea.Cuando la autoridad administrativa supere los términos establecidos en este artículo sin resolver de fondo la situación jurídica o cuando excedió el término inicial de seguimiento sin emitir la prórroga, perderá competencia de manera inmediata y deberá remitir el expediente al Juez de Familia para que este decida de fondo la situación jurídica en un término no superior a dos (2) meses. Si la autoridad administrativa no remite el expediente, el Director Regional hará la remisión al Juez de Familia.Con el fin de garantizar una atención con enfoque diferencial, en los casos en que se advierta que un proceso no puede ser definido de fondo en el término máximo establecido, por las situaciones fácticas y probatorias que reposan en el expediente, y que la imposibilidad no es por ausencia de acciones de la autoridad, el ICBF reglamentará un mecanismo para que la autoridad administrativa haga la ampliación del término, de forma extraordinaria, mediante resolución motivada, que será objeto de recurso de reposición, y de la homologación ante oposición o solicitud por parte del Ministerio Público. Cuando se trata de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad en los no cuales se hubiere superado la vulneración de derechos, por su condición, de niños extranjeros no susceptibles de declarar en adoptabilidad o de aquellos casos en los que por razones probadas se debe mantener el proceso, transitoriamente se continuará con la prestación del servicio de la modalidad de protección cuando se requiera, hasta tanto la entidad correspondiente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice la prestación del servicio de acuerdo con sus competencias legales. En éstos casos el proceso se mantendrá abierto mientras se supere la situación que motiva la discapacidad, amenaza o vulneración. | **Artículo 14.** El artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, quedará así:**Artículo 103. CARÁCTER TRANSITORIO DE LAS MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y DE LA DECLARATORIA DE VULNERACIÓN.** La autoridad administrativa que tenga la competencia del proceso podrá modificar las medidas de restablecimiento de derechos previstas en este Código cuando esté demostrada la alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución que así lo disponga se proferirá en audiencia y estará sometida a los mecanismos de oposición establecidos para el fallo en el artículo 100 del presente Código, cuando la modificación se genere con posterioridad a dicha actuación.El auto que fije fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no tendrá recursos.Cuando el cambio de medida se produzca antes de la audiencia de pruebas y fallo, deberá realizarse mediante auto motivado, notificado por estado, y no es susceptible de recurso alguno.En los procesos donde se declare en situación de vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes, la autoridad administrativa deberá hacer seguimiento por un término que no exceda seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, término en el cual determinará si procede el cierre del proceso cuando el niño, niña o adolescente esté ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneración de derechos; el reintegro al medio familiar cuando el niño se hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones para garantizar sus derechos; o la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos.En los casos excepcionales que la autoridad administrativa considere que debe superarse el término de seguimiento, deberá prorrogarlo mediante resolución motivada por un término que no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del término de seguimiento inicial. La prórroga deberá notificarse por Estado.El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos con el seguimiento tendrá una duración de dieciocho (18) meses, contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de adoptabilidad o el cierre del proceso por haberse evidenciado con los seguimientos, que la ubicación en medio familiar fue la medida idónea.Cuando la autoridad administrativa supere los términos establecidos en este artículo sin resolver de fondo la situación jurídica o cuando excedió el término inicial de seguimiento sin emitir la prórroga, perderá competencia de manera inmediata y deberá remitir el expediente al Juez de Familia para que este decida de fondo la situación jurídica en un término no superior a dos (2) meses. Si la autoridad administrativa no remite el expediente, el Director Regional hará la remisión al Juez de Familia.Con el fin de garantizar una atención con enfoque diferencial, en los casos en que se advierta que un proceso no puede ser definido de fondo en el término máximo establecido, por las situaciones fácticas y probatorias que reposan en el expediente, y que la imposibilidad no es por ausencia de acciones de la autoridad, el ICBF reglamentará un mecanismo para que la autoridad administrativa haga la ampliación del término, de forma extraordinaria, mediante resolución motivada, que será objeto de recurso de reposición, y de la homologación ante oposición o solicitud por parte del Ministerio Público. Cuando se trata de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad en los no cuales se hubiere superado la vulneración de derechos, por su condición, de niños extranjeros no susceptibles de declarar en adoptabilidad o de aquellos casos en los que por razones probadas se debe mantener el proceso, transitoriamente se continuará con la prestación del servicio de la modalidad de protección cuando se requiera, hasta tanto la entidad correspondiente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice la prestación del servicio de acuerdo con sus competencias legales. En éstos casos el proceso se mantendrá abierto mientras se supere la situación que motiva la discapacidad, amenaza o vulneración. | Sin modificaciones |
| **Artículo 15.** Conforme a lo establecido en el Decreto 936 de 2013, artículos 3 y 4, el ICBFimplementará el desarrollo y contenido de la presente Ley en las instancias de desarrollo técnico del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y en las instancias de participación las cuales serán garantes de la sociabilización de la presente Ley por medio de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes correspondiente, con el liderazgo de la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia o quien haga sus veces, de cada municipio. | **Artículo 15.** Conforme a lo establecido en el Decreto 936 de 2013, artículos 3 y 4, el ICBF implementará el desarrollo y contenido de la presente Ley en las instancias de desarrollo técnico del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y en las instancias de participación las cuales serán garantes de la sociabilización de la presente Ley por medio de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes correspondiente, con el liderazgo de la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia o quien haga sus veces, de cada municipio. | Sin modificaciones |
| **Artículo 16.** Créense las Unidades de Atención Familiar (U.A.F) para el acompañamiento de la labor que realizan las Defensorías de Familia,en lo establecido en el Artículo 52 de la Ley 1098 de 2006. | **Artículo 16.** Créense las Unidades de Atención Familiar (U.A.F) para el acompañamiento de la labor que realizan las Defensorías de Familia,en lo establecido en el artículo 52 de la Ley 1098 de 2006. | Sin modificaciones |
| **Artículo 17. Unidades de Atención Familiar (U.A.F).** Son organizaciones de la sociedad civil que cuentan, como mínimo, con los profesionales del equipo multidisciplinario que integran a las Defensorías de Familia. El Gobierno Nacional a través de la entidad competente reglamentará en un plazo de 6 meses a partir de la promulgación de la presente ley el funcionamiento de las U.A.F considerando como mínimo:1. Requisitos habilitantes de la organización y proceso de verificación.2. Mecanismo para el acceso a las U.A.F. por parte de la población.3. Mecanismos de seguimiento y permanencia como organización habilitada.4. Definición de los esquemas de apoyo y articulación con las Defensorías de Familia. Parágrafo 1. De acuerdo con su disponibilidad presupuestal el ICBF podrá contratar los servicios de las U.A.F., con el fin de aliviar la congestión de las Defensorías de Familia, previa solicitud del defensor.Parágrafo 2. Las organizaciones habilitadas para conformar U.A.F. podrán prestar sus servicios de manera gratuita en los términos definidos por la autoridad competente y tendrán prelación aquellas registradas ante el Sistema Nacional de Voluntariado.Parágrafo 3. Podrán postularse para conformar U.A.F. Instituciones de Educación Superior, Entidades Sin Ánimo de Lucro y aquellas con Personerías Jurídicas Especiales reconocidas por el Ministerio del Interior. | **Artículo 17. Unidades de Atención Familiar (U.A.F).** Son organizaciones de la sociedad civil que cuentan, como mínimo, con los profesionales del equipo multidisciplinario que integran a las Defensorías de Familia. El Gobierno Nacional a través de la entidad competente reglamentará en un plazo de 6 meses a partir de la promulgación de la presente ley el funcionamiento de las U.A.F considerando como mínimo:1. Requisitos habilitantes de la organización y proceso de verificación.2. Mecanismo para el acceso a las U.A.F. por parte de la población.3. Mecanismos de seguimiento y permanencia como organización habilitada.4. Definición de los esquemas de apoyo y articulación con las Defensorías de Familia. Parágrafo 1. De acuerdo con su disponibilidad presupuestal el ICBF podrá contratar los servicios de las U.A.F., con el fin de aliviar la congestión de las Defensorías de Familia, previa solicitud del defensor.Parágrafo 2. Las organizaciones habilitadas para conformar U.A.F. podrán prestar sus servicios de manera gratuita en los términos definidos por la autoridad competente y tendrán prelación aquellas registradas ante el Sistema Nacional de Voluntariado.Parágrafo 3. Podrán postularse para conformar U.A.F. Instituciones de Educación Superior, Entidades Sin Ánimo de Lucro y aquellas con Personerías Jurídicas Especiales reconocidas por el Ministerio del Interior. | Sin modificaciones |
| **Artículo 18**. Para el desarrollo del artículo anterior, añádase un Parágrafo 4 al artículo 52 de la ley 1098, el cual quedará así**:****PARÁGRAFO 4**. Los equipos multidisciplinares de las Unidades de Atención Familiar (U.A.F) podrán apoyar la labor de las Defensorías de Familia en la valoración y verificación de Derechos, previa orden de la Autoridad Administrativa, para lo cual deberán cumplir con los requisitos de los equipos multidisciplinarios que integran a las Defensorías de Familia. | **Artículo 18**. Para el desarrollo del artículo anterior, añádase un Parágrafo 4 al artículo 52 de la ley 1098**,** el cual quedará así**:****PARÁGRAFO 4.** Los equipos multidisciplinares de las Unidades de Atención Familiar (U.A.F) podrán apoyar la labor de las Defensorías de Familia en la valoración y verificación de Derechos, previa orden de la Autoridad Administrativa, para lo cual deberán cumplir con los requisitos de los equipos multidisciplinarios que integran a las Defensorías de Familia. | Sin modificaciones |
| **Artículo 19. Vigencia y derogatoria.** La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. | **Artículo 19. Vigencia y derogatoria**. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. | Sin modificaciones |

1. **Conflicto de intereses.**

Según lo establecido en el Artículo 3 de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, por la cual se modifica el Art. 291 de la Ley 5 de 1992, se hacen las siguientes consideraciones:

De manera meramente orientativa, se considera que para la discusión y aprobación de este Proyecto de Ley se podría generar un conflicto de interés para los honorables congresistas, si su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, laboran en las Defensorías de Familia, o se verían beneficiados con la nueva asignación del salario para los Defensores de Familia que trae la iniciativa, o con la inclusión en la prima contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

En todo caso, es pertinente aclarar que los conflictos de interés son personales y corresponde a cada congresista evaluarlos e interponer sus impedimentos.

1. **Proposición.**

Con fundamento en las anteriores consideraciones y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 5 de 1992, presento ponencia positiva con modificaciones y en consecuencia solicito a los miembros de la Plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo debate al Proyecto No. 279 de 2022 Cámara “por medio del cual se fortalecen las defensorías de familia y se dictan otras disposiciones” conforme al texto propuesto.

Atentamente.

**José Jaime Uscátegui Pastrana**

**Representante a la Cámara por Bogotá D.C.**

Capitolio Nacional

Congreso de la República

1. **Texto propuesto para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes**

**TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 279 DE 2022 CÁMARA**

**“POR MEDIO DEL CUAL SE FORTALECEN LAS DEFENSORÍAS DE FAMILIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

**EL CONGRESO DE COLOMBIA**

**DECRETA:**

**Artículo 1. Objeto**. La presente ley tiene por objeto el fortalecimiento institucional de las defensorías de familia y mejorar las condiciones laborales de las y los defensores de familia.

**Artículo 2.** Modifíquese el artículo 53 de la ley 1098 de 2006, agregando un parágrafo 4, del siguiente tenor:

**PARÁGRAFO 4.** Ordenar a los empleadores públicos o privados, efectuar el descuento por nómina, para el pago de la cuota alimentaria establecida legalmente, cuando ésta haya quedado en firme, y ejecutoriada en favor del niños, niñas y adolescentes, y el deudor haya incumplido con la obligación o se haya negado al pago de lo adeudado, o existan indicios de la intención de sustraerse del pago, de acuerdo con los artículos 111 y 129 de la Ley 1098 de 2006.

**Artículo 3.** Incorpórese un parágrafo 5 al artículo 53 de la ley 1098 de 2006, así:

**PARÁGRAFO 5**. Para evitar la revictimización, o el retracto por parte de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación, dispondrán de lo pertinente para garantizar que en cada Centro Zonal donde existan Defensorías de Familia y se verifiquen derechos y se adopten medidas en favor de niños niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual, se disponga de peritos e investigadores adscritos a la Fiscalía General de la Nación para que recuden las pruebas y realicen las entrevistas, de forma paralela a la definición de las medidas de restablecimiento de sus Derechos.

**Artículo 4.** Dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía General de la Nación, de forma coordinada, dispondrán del personal y la tecnología necesaria para el cumplimiento del artículo anterior.

**Artículo 5.** El artículo 79 de la Ley 1098 de 2006 quedará así:

**ARTÍCULO 79. DEFENSORÍAS DE FAMILIA**. Son dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de carácter multidisciplinario yadministrativo encargadas de prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes según lo establecido en la ley.

Cada defensoría de familia deberá contar con un defensor o defensora de familia que será el responsable de cumplir con las funciones del artículo 82 de la presente ley y de coordinar las actuaciones del equipo multidisciplinario, el equipo de apoyo y los demás integrantes para garantizar una atención integral y especializada a las personas usuarias de los servicios.

A los defensores de familia no se les podrán asignar funciones o responsabilidades que no estén previstas en la presente ley.

El defensor de familia será el director del proceso administrativo de restablecimiento de derechos y tendrá a su cargo el personal asignado a la defensoría de familia, la cual estará conformada por el defensor de familia y, por lo menos, por un abogado que asumirá la función de secretario de la defensoría, un auxiliar administrativo y un equipo multidisciplinario integrado, por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista, quienes deberán ser especializados en temas que guarden relación directa con las funciones de las defensorías de familia.

El ICBF dispondrá de equipos de apoyo con profesionales en las diferentes áreas del conocimiento como antropólogos y traductores, entre otras disciplinas, adicionales para cada defensoría de familia, de acuerdo con la demanda y las necesidades del servicio, para garantizar el cabal cumplimiento y la realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Los conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes del equipo multidisciplinario y del equipo de apoyo tendrán el carácter de dictamen pericial.

Cada defensoría de familia contará con el apoyo de un auxiliar jurídico ad-honorem. La defensoría de familia podrá solicitar un judicante adicional siempre que las necesidades del servicio así lo requieran, para lo cual deberá mediar autorización de la coordinación regional zonal respectiva. Los auxiliares jurídicos ad-honorem solo se podrán desempeñar en las áreas de intervención judicial, actuaciones administrativas y las demás de carácter jurídico acordes que sean requeridas en la respectiva defensoría de familia.

**Artículo 6.** Adiciónese el artículo 79A a la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

**Artículo 79A. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN**. Todo el personal que haga parte de las defensorías de familia deberá contar con una formación y actualización periódica sobre Infancia y Adolescencia, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Convencional, Derecho Penal y Administrativo, atención con enfoque diferencial de género, prevención de la violencia institucional, Derecho Constitucional, métodos alternativos de solución de conflictos y los demás asuntos que estén relacionados con su objetivo misional. Lo anterior estará a cargo del ICBF y para ello podrá suscribir convenios interinstitucionales.

**Artículo 7**. Inclúyase el siguiente parágrafo al artículo 99 de la Ley 1098 de 2006, el cual quedará así:

**PARÁGRAFO 4.** El proceso administrativo de restablecimiento de derechos se desarrollará el marco de un procedimiento oral y por audiencias, salvo aquellas actuaciones que se autoricen para que sean realizadas por escrito o, que, en virtud del interés superior de los menores de edad, requieran ser llevadas por escrito. Se preferirá la virtualidad, salvo los casos en que la Autoridad Administrativa o judicial considere necesaria la presencialidad, por el interés superior del niño, niña o adolescente.

**Artículo 8.** El defensor de familia tendrá una asignación salarial correspondiente al grado más alto del nivel profesional de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

**Artículo 9.** Modifíquese el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el cual quedará así:

El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil y los Defensores de Familia.

**PARÁGRAFO**. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.

**Artículo 10.** La prestación de la que trata el artículo anterior, en lo que respecta a las y los defensores de familia, deberá crearse y hacerse efectiva a partir de la vigencia fiscal siguiente a la promulgación de la presente ley.

**Artículo 11. Dirección de Defensorías de Familia:** Créese la Dirección de Defensorías de Familia dentro de la estructura general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para tal efecto el Instituto, en un plazo no mayor a doce (12) meses, a partir de la vigencia de la presente ley, tomará las medidas administrativas y presupuestales necesarias para este fin.

**Artículo 12.** **Funciones de la Dirección de Defensorías de Familia.** La Dirección de Defensorías de Familia del ICBF tendrá las siguientes funciones:

1. Diseñar el modelo de atención de las defensorías de familia.

2. Crear la Escuela de Formación de Defensorías de Familia.

3. Brindar asistencia técnica a las defensorías de familia cuando estas últimas lo soliciten en los asuntos de su competencia.

4. Definir estrategias de contingencia ante las diferentes situaciones administrativas que se presenten con el personal asignado a las defensorías de familia.

5. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de su objetivo misional.

6. Atender los requerimientos efectuados por parte de las entidades territoriales en el cumplimiento de la labor efectuada por los defensores y que se garantice la cobertura en los territorios.

7. Ser enlace entre los defensores y los departamentos para concertar los planes, programas y proyectos que fortalezcan los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

**Artículo 13.** Autorícese al gobierno nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, para efectuar las apropiaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento de lo estipulado en la presente ley.

**Artículo 14.** El artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, quedará así:

**Artículo 103. CARÁCTER TRANSITORIO DE LAS MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS Y DE LA DECLARATORIA DE VULNERACIÓN.** La autoridad administrativa que tenga la competencia del proceso podrá modificar las medidas de restablecimiento de derechos previstas en este Código cuando esté demostrada la alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La resolución que así lo disponga se proferirá en audiencia y estará sometida a los mecanismos de oposición establecidos para el fallo en el artículo 100 del presente Código, cuando la modificación se genere con posterioridad a dicha actuación.

El auto que fije fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no tendrá recursos.

Cuando el cambio de medida se produzca antes de la audiencia de pruebas y fallo, deberá realizarse mediante auto motivado, notificado por estado, y no es susceptible de recurso alguno.

En los procesos donde se declare en situación de vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes, la autoridad administrativa deberá hacer seguimiento por un término que no exceda seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria del fallo, término en el cual determinará si procede el cierre del proceso cuando el niño, niña o adolescente esté ubicado en medio familiar y ya se hubiera superado la vulneración de derechos; el reintegro al medio familiar cuando el niño se hubiera encontrado institucionalizado y la familia cuente con las condiciones para garantizar sus derechos; o la declaratoria de adoptabilidad cuando del seguimiento se hubiera establecido que la familia no cuenta con las condiciones para garantizar los derechos.

En los casos excepcionales que la autoridad administrativa considere que debe superarse el término de seguimiento, deberá prorrogarlo mediante resolución motivada por un término que no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir del vencimiento del término de seguimiento inicial. La prórroga deberá notificarse por Estado.

El Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos con el seguimiento tendrá una duración de dieciocho (18) meses, contados a partir del conocimiento de los hechos por parte de la autoridad administrativa hasta la declaratoria de adoptabilidad o el cierre del proceso por haberse evidenciado con los seguimientos, que la ubicación en medio familiar fue la medida idónea.

Cuando la autoridad administrativa supere los términos establecidos en este artículo sin resolver de fondo la situación jurídica o cuando excedió el término inicial de seguimiento sin emitir la prórroga, perderá competencia de manera inmediata y deberá remitir el expediente al Juez de Familia para que este decida de fondo la situación jurídica en un término no superior a dos (2) meses. Si la autoridad administrativa no remite el expediente, el Director Regional hará la remisión al Juez de Familia.

Con el fin de garantizar una atención con enfoque diferencial, en los casos en que se advierta que un proceso no puede ser definido de fondo en el término máximo establecido, por las situaciones fácticas y probatorias que reposan en el expediente, y que la imposibilidad no es por ausencia de acciones de la autoridad, el ICBF reglamentará un mecanismo para que la autoridad administrativa haga la ampliación del término, de forma extraordinaria,mediante resolución motivada, que será objeto de recurso de reposición, y de la homologación ante oposición o solicitud por parte del Ministerio Público.

Cuando se trata de procesos administrativos de restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad en los no cuales se hubiere superado la vulneración de derechos, por su condición, de niños extranjeros no susceptibles de declarar en adoptabilidad o de aquellos casos en los que por razones probadas se debe mantener el proceso, transitoriamente se continuará con la prestación del servicio de la modalidad de protección cuando se requiera, hasta tanto la entidad correspondiente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice la prestación del servicio de acuerdo con sus competencias legales. En éstos casos el proceso se mantendrá abierto mientras se supere la situación que motiva la discapacidad, amenaza o vulneración.

**Artículo 15.** Conforme a lo establecido en el Decreto 936 de 2013, artículos 3 y 4, el ICBFimplementará el desarrollo y contenido de la presente Ley en las instancias de desarrollo técnico del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y en las instancias de participación las cuales serán garantes de la sociabilización de la presente Ley por medio de la mesa de participación de niños, niñas y adolescentes correspondiente, con el liderazgo de la Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia o quien haga sus veces, de cada municipio.

**Artículo 16.** Créense las Unidades de Atención Familiar (U.A.F) para el acompañamiento de la labor que realizan las Defensorías de Familia,en lo establecido en el Artículo 52 de la Ley 1098 de 2006.

**Artículo 17. Unidades de Atención Familiar (U.A.F).** Son organizaciones de la sociedad civil que cuentan, como mínimo, con los profesionales del equipo multidisciplinario que integran a las Defensorías de Familia.

El Gobierno Nacional a través de la entidad competente reglamentará en un plazo de 6 meses a partir de la promulgación de la presente ley el funcionamiento de las U.A.F considerando como mínimo:

1. Requisitos habilitantes de la organización y proceso de verificación.

2. Mecanismo para el acceso a las U.A.F. por parte de la población.

3. Mecanismos de seguimiento y permanencia como organización habilitada.

4. Definición de los esquemas de apoyo y articulación con las Defensorías de Familia.

Parágrafo 1. De acuerdo con su disponibilidad presupuestal el ICBF podrá contratar los servicios de las U.A.F., con el fin de aliviar la congestión de las Defensorías de Familia, previa solicitud del defensor.

Parágrafo 2. Las organizaciones habilitadas para conformar U.A.F. podrán prestar sus servicios de manera gratuita en los términos definidos por la autoridad competente y tendrán prelación aquellas registradas ante el Sistema Nacional de Voluntariado.

Parágrafo 3. Podrán postularse para conformar U.A.F. Instituciones de Educación Superior, Entidades Sin Ánimo de Lucro y aquellas con Personerías Jurídicas Especiales reconocidas por el Ministerio del Interior.

**Artículo 18**. Para el desarrollo del artículo anterior, añádase un Parágrafo 4 al artículo 52 de la ley 1098, el cual quedará así**:**

**PARÁGRAFO 4**. Los equipos multidisciplinares de las Unidades de Atención Familiar (U.A.F) podrán apoyar la labor de las Defensorías de Familia en la valoración y verificación de Derechos, previa orden de la Autoridad Administrativa, para lo cual deberán cumplir con los requisitos de los equipos multidisciplinarios que integran a las Defensorías de Familia.

**Artículo 19. Vigencia y derogatoria.** La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

**José Jaime Uscátegui Pastrana**

**Representante a la Cámara por Bogotá D.C.**

Capitolio Nacional

Congreso de la República

1. La Vanguardia. Cese de actividades de trabajadores de Bienestar Familiar en Barrancabermeja. 5 de mayo de 2022. <https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/cese-de-actividades-de-trabajadores-de-bienestar-familiar-en-barrancabermeja-AC5163233> [↑](#footnote-ref-1)
2. Bu Radio. Por sobre carga laboral, funcionarios del ICBF en Antioquia están en paro. 26 de febrero de 2022. <https://www.bluradio.com/nacion/por-sobre-carga-laboral-funcionarios-del-icbf-en-antioquia-estan-en-paro> [↑](#footnote-ref-2)
3. Informe Vigilancia superior a las defensorías de familia y a la garantía y restablecimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el sistema de protección del Estado. Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de la Procuraduría General de la Nación. Octubre de 2020. <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/VIGILANCIA%20SUPERIOR%20VF%2014_11_2020%281%29.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. Informe Vigilancia superior a las defensorías de familia y a la garantía y restablecimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el sistema de protección del Estado. Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de la Procuraduría General de la Nación. Octubre de 2020. <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/docs/VIGILANCIA%20SUPERIOR%20VF%2014_11_2020%281%29.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. Constitución Política de Colombia. Artículo 2. <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html> [↑](#footnote-ref-5)
6. Constitución Política de Colombia. Artículo 44. <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html> [↑](#footnote-ref-6)
7. Constitución Política de Colombia. Artículo 93. <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html> [↑](#footnote-ref-7)
8. Organización de las Naciones Unidas. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 19. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/17229a.pdf> [↑](#footnote-ref-8)
9. Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 3. <https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf> [↑](#footnote-ref-9)
10. Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 4. <https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf> [↑](#footnote-ref-10)
11. Ley 1098 de 2016. “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”. <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html#LIBRO%20I> [↑](#footnote-ref-11)
12. Ley 1878 de 2018. “Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la Ley 1908 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones”. <https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1878_2018.htm> [↑](#footnote-ref-12)
13. Ley 2126 de 2021. “Por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías de Familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones.” <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2126_2021.html> [↑](#footnote-ref-13)